

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
 JUZGADO : Juzgado de Letras y Gar.de pto.Aysen
 CAUSA ROL : C-345-2019
 CARATULADO : SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y
 ACUICULTURA/SALMONES BLUMAR S.A.

Puerto Aysén, doce de junio del año dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 11 de junio de 2019, comparece **CHRISTOFER ERICK HEYER RAMÍREZ**, Fiscalizador del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Región de Aysén, Cédula Nacional de Identidad 15.311.821-3, ambos con domicilio para estos efectos en calle Caupolicán N° 653, de la ciudad de Puerto Aysén, quien formula denuncia por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura y su normativa anexa, en contra de **SALMONES BLUMAR S.A.**, RUT 76.653.690-5, representada por GERARDO ANDRÉS BALBONTIN FOX, Cédula Nacional de Identidad 7.254.586-9, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en Avenida Juan Soler Manfredini N°11, oficina 1202, Puerto Montt, Región de Los Lagos.

Fundando su presentación, refiere que el centro de cultivo objeto de la denuncia, corresponde a la concesión acuícola inscrita en el Registro Nacional de Acuicultura bajo el código RNA 110771, denominado "Punta Cola", cuyo titular es Salmones Blumar S.A., en el cual se realizó el cultivo de salmónidos de la especie Salmon del Atlántico, y se encuentra ubicado al Norte de Punta Cola, Seno Aysén, correspondiente a la Agrupación de Concesiones 28 B, e inició su ciclo productivo el día 24 de febrero de 2018 (semana 9-2018).

Sostiene que el monitoreo de la evolución de mortalidades generadas en los centros de cultivo, es una de las herramientas fundamentales para la gestión en la fiscalización sanitaria en base al análisis de riesgo, por lo tanto, la entrega oportuna y fidedigna de este tipo de información es primordial para monitorear, entre otras cosas, el status sanitario de la Región.

Indica que el día 12 de diciembre del 2018, a partir de las 09:00 horas, en las dependencias del Servicio Regional, inició las labores de fiscalización respecto a la entrega de información al Servicio de las mortalidades generadas en los centros de cultivo de la Región de Aysén, para lo cual verificó tanto la plataforma dispuesta para este fin, denominada Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA), como también el correo electrónico destinado como opcional para este fin, mortalidades@sernapesca.cl, percatándose que no se encontraba nuevamente efectuada la declaración de mortalidad correspondiente a la semana 49-2018 (03-12-2018 al 09-12-2018) del centro "Punta Cola", la cual debía ser informada a más tardar el día 10 de diciembre de 2018. Agrega que en virtud a que en días posteriores los titulares continuaron sin efectuar la declaración de mortalidad, solicitó mediante correo electrónico



a la empresa, la regularización de dicha información, con motivo de lo cual el centro de cultivo declara sus mortalidades vía correo electrónico el día 12 de diciembre del 2018 y las sube a SIFA el mismo día, por lo que de este modo se constata que el centro Punta Cola declara sus mortalidades fuera de plazo.

Señala que con anterioridad a la fecha indicada en el párrafo anterior, esto es, la semana 36-2018 (03-09-2018 al 09-09-2018), donde el plazo máximo para declarar sus mortalidades vencía el 10 de septiembre de 2018, se le indicó a la empresa, por correo electrónico de fecha 12 de septiembre de 2018, de su incumplimiento, declarando sus mortalidades ese mismo día en virtud de la solicitud efectuada por el Servicio.

Manifiesta que la entrega de información fuera de plazo, es reiterada durante gran parte del ciclo productivo del centro “Punta Cola”, no cumpliendo con los plazos en 17 de las 46 declaraciones de mortalidad donde existieron operaciones, conforme da cuenta la siguiente tabla:

Periodo	Fecha de Declaración	Plazo máximo de declaración	Días fuera de plazo	Observaciones
Semana 8 (19-FEB-2018 al 25-FEB-2018)	02-03-2018	26-02-2018	3	Se anula declaración informada el 01-03-2018
Semana 9 (26-FEB-2018 al 4-MAR-2018)	06-03-2018	05-03-2018	1	
Semana 10 (5-MAR-2018 al 11-MAR-2018)	12-03-2018	12-03-2018	0	
Semana 11 (12-MAR-2018 al 18-MAR-2018)	27-03-2018	19-03-2018	8	Se anula declaración informada el 19-03-2018
Semana 12 (19-MAR-2018 al 25-MAR-2018)	27-03-2018	26-03-2018	1	
Semana 13 (26-MAR-2018 al 1-ABR-2018)	02-04-2018	02-04-2018	0	
Semana 14 (2-ABR-2018 al 8-ABR-2018)	09-04-2018	09-04-2018	0	
Semana 15 (9-ABR-2018 al 15-ABR-2018)	16-04-2018	16-04-2018	0	
Semana 16 (16-ABR-2018 al 22-ABR-2018)	24-04-2018	23-04-2018	1	
Semana 17 (23-ABR-2018 al 29-ABR-2018)	30-04-2018	30-04-2018	0	
Semana 18 (30-ABR-2018 al 6-MAY-2018)	08-05-2018	07-05-2018	1	



Semana 19 (7-MAY-2018 al 13-MAY-2018)	18-05-2018	14-05-2018	4	
Semana 20 (14-MAY-2018 al 20-MAY-2018)	21-05-2018	21-05-2018	0	
Semana 21 (21-MAY-2018 al 27-MAY-2018)	28-05-2018	28-05-2018	0	
Semana 22 (28-MAY-2018 al 3-JUN-2018)	04-06-2018	04-06-2018	0	
Semana 23 (4-JUN-2018 al 10-JUN-2018)	11-06-2018	11-06-2018	0	
Semana 24 (11-JUN-2018 al 17-JUN-2018)	18-06-2018	18-06-2018	0	
Semana 25 (18-JUN-2018 al 24-JUN-2018)	25-06-2018	25-06-2018	0	
Semana 26 (25-JUN-2018 al 1-JUL-2018)	03-07-2018	02-07-2018	1	
Semana 27 (2-JUL-2018 al 8-JUL-2018)	09-07-2018	09-07-2018	0	
Semana 28 (9-JUL-2018 al 15-JUL-2018)	17-07-2018	16-07-2018	1	

Semana 29 (16-JUL-2018 al 22-JUL-2018)	23-07-2018	23-07-2018	0	
Semana 30 (23-JUL-2018 al 29-JUL-2018)	02-08-2018	30-07-2018	3	
Semana 31 (30-JUL-2018 al 5-AGO-2018)	07-08-2018	06-08-2018	1	
Semana 32 (6-AGO-2018 al 12-AGO-2018)	13-08-2018	13-08-2018	0	
Semana 33 (13-AGO-2018 al 19-AGO-2018)	20-08-2018	20-08-2018	0	
Semana 34 (20-AGO-2018 al 26-AGO-2018)	27-08-2018	27-08-2018	0	
Semana 35 (27-AGO-2018 al 2-SEP-2018)	03-09-2018	03-09-2018	0	
Semana 36 (3-SEP-2018 al 9-SEP-2018)	12-09-2018	10-09-2018	2	
Semana 37 (10-SEP-2018 al 16-SEP-2018)	17-09-2018	17-09-2018	0	
Semana 38 (17-SEP-2018 al 23-SEP-2018)	24-09-2018	24-09-2018	0	
Semana 39 (24-SEP-2018 al 30-SEP-2018)	02-10-2018	01-10-2018	1	
Semana 40 (1-OCT-2018 al 7-OCT-2018)	09-10-2018	08-10-2018	0	
Semana 41 (8-OCT-2018 al 14-OCT-2018)	16-10-2018	15-10-2018	0	



GXNXPYZHGN

Semana 41 (8-OCT-2018 al 14-OCT-2018)	15-10-2018	15-10-2018	0	
Semana 42 (15-OCT-2018 al 21-OCT-2018)	22-10-2018	22-10-2018	0	
Semana 43 (22-OCT-2018 al 28-OCT-2018)	31-10-2018	29-10-2018	2	
Semana 44 (29-OCT-2018 al 4-NOV-2018)	05-11-2018	05-11-2018	0	
Semana 45 (5-NOV-2018 al 11-NOV-2018)	12-11-2018	12-11-2018	0	
Semana 46 (12-NOV-2018 al 18-NOV-2018)	19-11-2018	19-11-2018	0	
Semana 47 (19-NOV-2018 al 25-NOV-2018)	27-11-2018	26-11-2018	1	
Semana 48 (26-NOV-2018 al 2-DIC-2018)	03-12-2018	03-12-2018	0	
Semana 49 (3-DIC-2018 al 9-DIC-2018)	12-12-2018	10-12-2018	2	
Semana 50 (10-DIC-2018 al 16-DIC-2018)	17-12-2018	17-12-2018	0	
Semana 51 (17-DIC-2018 al 23-DIC-2018)	25-12-2018	24-12-2018	1	
Semana 52 (24-DIC-2018 al 30-DIC-2018)	01-01-2019	31-12-2018	1	
Semana 1 (31-DIC-2018 al 6-ENE-2019)	07-01-2019	07-01-2019	0	

Que tal como se grafica en la tabla, de conformidad a la información recopilada, se establece que las declaraciones fuera de plazo corresponden a las semanas 8-9-12-16-18-19-26-28-30-31-36-39-43-47-49-51-52.

Refiere que el titular del centro de cultivo no informó motivos de fuerza mayor u otro que pueda justificar el atraso de sus declaraciones, debiendo solicitar el Servicio regularizar sus declaraciones por ser de vital importancia para el trabajo de fiscalización que desempeña este organismo del Estado.

Por todo lo referido, sostiene que la infracción denunciada consiste en que **el Centro de Cultivos “Punta Cola” efectúa sus declaraciones de mortalidad fuera del plazo que establece la normativa, transgrediendo lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el Decreto Supremo N°319/2001, en la Resolución Exenta N°1468/2012 y en el Decreto Supremo N° 129/2013.**

En cuanto al Derecho, señala que los hechos descritos constituyen infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura, en especial, a lo dispuesto en los artículos 69, 81 y 113 inciso final de la referida Ley.

Señala que, en subsidio, y para el caso que se estime que no se ha infringido el artículo 113 inciso final de la Ley General de Pesca y Acuicultura, las disposiciones infringidas corresponderían a los artículos 86 y 118 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, al Decreto Supremo N° 319 del año 2001, que Aprueba Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies Hidrobiológicas; la Resolución Exenta N° 1468/2012, que “Aprueba Programa Sanitario General de manejo de Mortalidades y su Sistema de Clasificación Estandarizado, conforme a categorías preestablecidas (PSGM)”; y el Decreto Supremo N° 129/2013, “Reglamento para la Entrega de Información de Pesca y Acuicultura y la Acreditación de Origen”.

Hace presente que en base a la infracción denunciada, el artículo 113 inciso final de la Ley General de Pesca y Acuicultura, es de necesaria y única aplicación, por tratarse de



una norma específica y especial que regula materias propias y que únicamente guardan relación con actividades de acuicultura, y es tan evidente su aplicación, que la norma comienza indicando que el destinatario único de esta norma son “Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de acuicultura a cualquier título...”. Añade que el artículo 113 es la norma que sanciona en la Ley General de Pesca y Acuicultura las infracciones aplicables en aquellos casos donde se infrinja el deber de información en cualquiera de sus formas, por parte de los diferentes agentes, tanto en pesca como en acuicultura. Que de la sola lectura de los incisos primero, segundo, cuarto y quinto, (el inciso tercero fue derogado), se puede colegir que aquellos tienen por objeto regular la infracción al deber de información, en cualquiera de sus formas, en materias de pesca, tanto así, que si se observa a los sujetos regulados, se puede ver que todos ellos tienen íntima relación con materias asociadas a la pesca, y que en el caso del inciso final del artículo 113, a diferencia de lo indicado en los demás incisos, “las personas naturales y jurídicas” a las que hace mención, son y deben ser aquellas que realicen actividades de acuicultura, por lo que a contrario sensu cabe citar el aforismo jurídico que señala que “Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus” (Donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir).

Sostiene que si el legislador hubiese querido hacer extensible los demás incisos del artículo 113 a otros sujetos, lo hubiese indicado expresamente como es el caso del inciso final, que distingue y señala expresamente al destinatario de la norma, que son personas naturales o jurídicas que realicen actividades de acuicultura, siendo por tanto el resto de incisos y normas contenidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura inespecíficos para la aplicación del caso concreto.

En cuanto a la sanción aplicable, señala que se contempla en el artículo 113 inciso final de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el cual dispone que *“Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de acuicultura a cualquier título y entreguen información falsa acerca de la operación de los centros de cultivo de que son titulares, o sobre la condición sanitaria de los mismos referida a las enfermedades de alto riesgo, serán sancionados con multas de 500 a 3.000 UTM y suspensión de operaciones hasta por dos ciclos de cultivo consecutivos. La misma sanción será impuesta a quienes entreguen información incompleta o subreportes o entreguen información fuera de plazo, salvo que se trate en este último caso de la información a que se refiere el artículo 118 ter letra g), en cuyo evento se aplicará el procedimiento y la sanción indicada en dicha norma. Serán sancionadas de la misma forma, las personas naturales o jurídicas que realicen actividades sometidas a las medidas de protección previstas en los reglamentos a que se refieren los artículos 86 y 87 de esta ley y que incurran en las conductas antes señaladas. En caso de reincidencia, la sanción se duplicará.”*

En subsidio, indica que la sanción aplicable se encuentra establecida en el artículo 118 de la Ley, el que señala: *“El que ejerciere actividades de acuicultura a cualquier título u otra de las actividades sometidas a los reglamentos establecidos de conformidad con los artículos 86 y 87 y no adoptare las medidas de protección dispuestas en ellos o en los programas sanitarios dictados por resolución del Servicio, de conformidad con dichos*



reglamentos será sancionado con una multa de 50 a 3.000 unidades tributarias mensuales. Si la infracción se refiere al incumplimiento de las medidas de protección dispuestas en los artículos 88 o 90, la sanción será una multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales.

En caso de reincidencia, el juez podrá aplicar las sanciones establecidas precedentemente, multiplicadas por tres o por cuatro.”

Hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122, en relación al artículo 125, N° 1 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, y en virtud de su calidad de fiscalizador del Servicio como Ministro de fe, la denuncia cuenta con presunción de veracidad.

Finalmente, en virtud de los hechos y normas invocadas, solicita tener por interpuesta denuncia por Infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura y demás normativa pertinente, en contra de SALMONES BLUMAR S.A., representada por GERARDO ANDRÉS BALBONTIN FOX, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación y, en definitiva declarar:

1.- Que se la condene al pago a una multa correspondiente al máximo de la sanción establecida en la ley, esto es, 3.000 (tres mil) Unidades Tributarias Mensuales o a la suma que el tribunal considere procedente, y la suspensión de operaciones por dos ciclos consecutivos del centro de cultivo Punta Cola Código RNA 110771 o la cantidad de ciclos que el tribunal estime pertinente, por ser responsable de la infracción consistente en no informar dentro de plazo la mortalidad extraída de forma semanal como exige la normativa.

2.- Que, **en subsidio**, se le condene al pago de una multa correspondiente al máximo de la sanción establecida en el artículo 118 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, esto es, 3000 (tres mil) Unidades Tributarias Mensuales o a la suma que el tribunal estime procedente.

3.- Que se condene en costas a la denunciada.

Que con fecha 01 de julio de 2019, la abogada **María José Rothkegel Barría**, en representación de la denunciada, formula los descargos a la denuncia de autos, refiriendo que el Servicio señala en su denuncia que su representada habría infringido las normas sobre entrega de información, pues ésta debió ser entregada a más tardar el primer día hábil de la semana siguiente, cuando la norma realmente indica que el plazo para entregar la información es a más tardar al tercer día hábil de la semana siguiente. (Resolución 1468, del 22 de junio de 2012).

Señala que su parte no niega las fechas indicadas por el Servicio para la entrega de la información, salvo en las semanas 8 y 11, pues en ambas la información fue entregada y posteriormente rectificada, pero la obligación en cuanto al plazo fue cumplida perfectamente.

Reitera que la obligación de entregar el informe semanal de las mortalidades acumuladas en la semana debe ser realizado durante la semana siguiente a aquella en que se registra la mortalidad y a más tardar al tercer día



hábil de la semana siguiente a ésta, lo que efectivamente fue realizado por su representante en la mayoría de los casos, y las 2 veces que no fue realizado dentro de plazo, se debió a causa fortuita o fuerza mayor.

Sostiene que la obligación de entrega de información consiste en realizar una sumatoria de la mortalidad acumulada día a día de una semana determinada, la que obviamente sólo puede ser conocida y consecuentemente informada a la semana siguiente de registrada ésta, de lo contrario no incluiría la totalidad de los días, por lo tanto y conforme a la lógica, la información sólo puede ser entregada en la semana siguiente (en que se registró la mortalidad), estableciendo la misma autoridad el plazo máximo para la entrega, cual es el al “tercer” día hábil de la semana siguiente, correspondiendo entonces determinar a qué semana se refiere, y la interpretación natural y lógica debe llevar a resolver que se refiere necesariamente a la semana siguiente en que se debía cumplir la obligación, tiempo suficiente para poder hacer la sumatoria semanal y enviarla al Servicio.

Agrega que la semana 19 y la semana 30, la información se presentó con uno y dos días de atraso respectivamente, lo que se debió a causa fortuita o fuerza mayor, toda vez que el Internet del Centro estaba “caído” por lo que la información no pudo ser despachada desde el centro, sino hasta el día siguiente, y en el otro caso, hasta el día subsiguiente.

Señala que por la ubicación del centro Punta Cola, durante el año 2018, especialmente los meses de mayo y julio, dicho centro presentó diversos problemas con la conexión a Internet, lo que derivó a un cambio de proveedor de éste sistema, pasando de Movistar a Satelnet SpA, quien presta actualmente el servicio de Internet.

Refiere que el “caso fortuito” aparece definido por el Diccionario de la Real Academia Española como *“un suceso, por lo común dañoso, que acontece inesperadamente”*; a su turno, “fuerza mayor” ha sido definida como *“la que, por no poderse prever o resistir, exime del cumplimiento de alguna obligación. En sentido estricto, la que procede de la voluntad de un tercero”*.

Indica que nuestro Código Civil se ha hecho cargo de ambos institutos, en su artículo 45, al señalar que *“se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”*

Manifiesta que de la disposición anotada se colige que para que se configure la fuerza mayor o caso fortuito es necesario la concurrencia copulativa de los siguientes elementos:

a) Que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor sea inimputable, es decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, en el sentido de que la parte que lo alega no haya contribuido en forma alguna a su producción.



b) Que el referido hecho o suceso sea imprevisible, vale decir, que no se haya podido prever dentro de cálculos ordinarios o corrientes.

c) Que el hecho o suceso sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

Así, concurriendo los requisitos antes mencionados, un determinado hecho podrá ser calificado como caso fortuito el cual exonerara a las partes de responsabilidad.

Sostiene que la exoneración de responsabilidad producto del caso fortuito tiene un alcance doblemente limitado, tanto en su desarrollo temporal como en los daños generados. Es temporal, porque sólo se extiende mientras perdure la imprevisión en el resultado. En este evento el empresario debe adoptar las providencias indispensables y adecuadas para soslayar la producción futura del perjuicio, o bien, para minimizar sus efectos, y así no lo hace, los daños ambientales ocasionados con posterioridad son susceptibles de imputarse a su culpa. Luego, si convergen simultáneamente en el evento lesivo daños ambientales imprevisibles con daños ambientales previsibles, la exoneración de responsabilidad no será absoluta y sólo se limitará a los primeros, aunque la manifestación de ambos coincida en el tiempo, siendo labor del juez definir en el caso concreto cada uno de ellos.

Por otro lado, manifiesta que la norma sancionatoria es la del artículo 116, en relación con el D.S. 129 o Reglamento de entrega de la información y en ningún caso el inciso final del artículo 113, ni el artículo 118, como erróneamente señala la denuncia.

Señala que aun cuando se decida sancionar a su representada, la norma supuestamente infraccionada no debiese en caso alguno ser la establecida en el artículo 113 sino la establecida en el artículo 63, todas de la Ley de Pesca, como subsidiariamente lo solicitó el Servicio en su denuncia, y en consecuencia señala que la multa debió haber sido la establecida en el artículo 116 y no la indicada en el artículo 113 inciso final, ni en el artículo 118, conforme lo señala la denuncia.

Refiere que el artículo 118 de la Ley General de Pesca y Acuicultura se refiere a las medidas de protección contempladas en el Reglamento Sanitario de la Acuicultura y por su parte, el artículo 63 se refiere a la entrega de información, cuando ésta no es oportuna, como reclama la denunciante que habría sucedido.

Manifiesta que el artículo 63 de la Ley, es la norma específica que se debe aplicar en este caso, pues se refiere precisamente a la entrega de información sanitaria que debe acompañarse al Servicio.

Señala que es necesario hacer una distinción, porque la realiza el mismo legislador, en cuanto a si la infracción es de medidas de protección que aparecen señaladas en el Reglamento Sanitario (por ejemplo no haber



efectuado algún examen; haber realizado un mal manejo de mortalidad, etc.) o si por el contrario, la infracción se produce por no entrega de información oportuna, completa o fidedigna, en cuyo caso se aplica el artículo 63 de la Ley.

Indica que el inciso segundo del artículo 116 de la Ley, se refiere a aquellas infracciones a la normativa acuícola que no tuvieron una sanción especial (como es precisamente el caso del artículo 63 de la ley): *“En el caso de infracciones de la normativa sobre acuicultura que no tuvieron prevista una sanción especial en la ley, se les aplicará una multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales.”*

Cita Jurisprudencia en aval de sus aseveraciones, solicitando, finalmente, tener por contestada la denuncia interpuesta por el Servicio Nacional de Pesca de la XI región, en contra de Salmones Blumar S.A., por supuesta infracción a la normativa pesquera, y desecharla en todas sus partes con costas; **y en subsidio**, y para el eventual evento que la presente denuncia sea acogida, solicita que la sanción que se imponga sea aplicada en el tramo mínimo del artículo 116 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Con fecha 01 de agosto de 2019, se recibió la causa a aprueba.

Con fecha 04 de mayo de 2020, se citó a las partes para oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme lo referido en lo expositivo precedente, el objeto del juicio consistirá en determinar la efectividad que la denunciada incurrió en la infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura y su normativa anexa, la que conforme al mérito de la denuncia formulada, se hace consistir en que el Centro de Cultivos “Punta Cola”, cuyo titular es SALMONES BLUMAR S.A., **efectúa sus declaraciones de mortalidad fuera del plazo que establece la normativa, transgrediendo lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el Decreto Supremo N°319/2001, en la Resolución Exenta N°1468/2012 y en el Decreto Supremo N° 129/2013.**

SEGUNDO: Que la denuncia de marras cumple con las exigencias del artículo 125 N°1 de la ley General de Pesca y Acuicultura, ya que fue realizada por funcionario del Servicio Nacional de Pesca, cuya calidad de tal fluye del certificado de antigüedad N° 10369, legalmente acompañado y no objetado, adjuntándose, asimismo, la Citación efectuada a la denunciada, en los términos exigidos por la ley, por lo que tiene mérito para que con ella se presuma legalmente la ocurrencia de los hechos denunciados, sin perjuicio del correspondiente análisis y valoración de la prueba rendida en autos.

TERCERO: Que, a fin de acreditar sus pretensiones, las partes rindieron la siguiente prueba:

PRUEBA PARTE DENUNCIANTE:

I.- Documental:

1. Copia de citación N° 0116383;



2. Certificado Antigüedad N°10369 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura;

3. Copia de correos electrónicos de fecha 24 de abril de 2018, de 12 de septiembre de 2018 y de 12 de diciembre de 2018, del Servicio Nacional de Pesca a Salmones Blumar S.A.;

4. Anexo de declaraciones fuera de plazo del centro “Punta Cola” a SIFA;

5. Copia de oficio Ord. 123950, de fecha 15 de marzo de 2018, de la Subdirectora de Acuicultura del Sernapesca a las empresas de cultivo;

6. Copia del Diario Oficial, de fecha 14 de marzo de 2018, que publica la Resolución Exenta 731, de fecha 05 de marzo de 2018, la cual modifica la Resolución Exenta 1468/2012;

7. Copia de correo electrónico de Patricio Medina Herrera, Jefe del Departamento de Salud Animal del Sernapesca Dirección Nacional, de fecha 16 de marzo de 2018, enviado a todos los titulares de centros de cultivos existentes en Chile, que da cuenta de la publicación en el diario oficial, de la Resolución Exenta 731/2018, en la cual se acompaña un boletín informativo y la resolución señalada;

8. Boletín informativo del Sernapesca, de fecha 15 de marzo de 2018, enviado a todos los titulares de centros de cultivos existentes en Chile, que da cuenta de la publicación en el diario oficial de la Resolución Exenta 731/2018;

9. Impresión de pantalla de la página oficial del Sernapesca, que da cuenta de la publicación de la Resolución Exenta 731/2018, de fecha 05 de marzo de 2018;

10. Copia de correo electrónico de Jorge Padilla Trujillo, Jefe Regional de Acuicultura Región de Aysén, de fecha 16 de marzo de 20, enviado a todas las empresas existentes en la región de Aysén, que da cuenta de la publicación en el diario oficial, de la Resolución Exenta 731/2018, en la cual se acompaña un boletín informativo y la resolución señalada; y

11. Resolución Exenta 1468/2012, publicada en la Biblioteca del Congreso Nacional, que contiene la última modificación de 14 de marzo de 2018; y

II.- Oficios:

Respuesta de Salmones Blumar S.A., de fecha 23 de diciembre de 2019, efectuada a través de su abogado ALEJANDRO GONZÁLEZ DEL RIEGO GARCÍA, al oficio remitido con fecha 13 de septiembre de 2019.

PRUEBA PARTE DENUNCIADA:

I.- Documental:

1. Impresión de página web del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, correspondiente al día 1 de julio de 2019, donde se contiene el Programa Sanitario General de Manejo de mortalidades;

2. Resolución 1468, del 2012 Programa Sanitario General de Manejo de Mortalidades, que se encuentra publicado en la página web del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura;



3. Correo electrónico interno, de fecha 13 de mayo de 2018, enviado de Centro Punta Cola a Carlos Feliu, médico veterinario de Blumar S.A. y Pedro Acuña, Daniela Vargas y Francisco Vallejos; Asunto: SIFA 19;

4. Correo electrónico interno, de fecha 02 de marzo de 2018, enviado de Centro Punta Cola a Carlos Feliu y Pedro Acuña y Carlos Aranda; Asunto: Reenvío mortalidad semanal del 19 de febrero al 25 de febrero de 2018, firmado por Cristian Pérez, de Blumar S.A.; y

5. Correo electrónico interno, de fecha 29 de julio de 2018, enviado de Centro Punta Cola a Andrea Valdés, Francisco Vallejos y Pedro Acuña: Asunto: SIFA semana 30, firmado por Cristian Pérez, de Blumar S.A.

II.- Testimonial:

ALEX JAVIER MORENO MENDOZA, cédula de identidad 8.696.764-2, nacido en Chuquicamata, 46 años, ingeniero en acuicultura, domiciliado en Pasaje Maule 4978, Valle Volcanes, Puerto Montt. Trabaja en Salmones Blumar S.A. desde julio de 2010, como Jefe de Área Sur, quien fue legalmente juramentado y sin tacha.

CUARTO: Que en cuanto a la legislación aplicable a la materia de autos, se debe tener presente lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, precepto legal que señala: *“La concesión o autorización de acuicultura tienen por único objeto la realización de actividades de cultivo en el área concedida, respecto de la especie o grupo de especies hidrobiológicas indicadas en la resolución o autorización que las otorgan, y permiten a sus titulares el desarrollo de sus actividades, sin más limitaciones que las expresamente establecidas en esta ley y sus reglamentos.”*

Que, por su parte, el artículo 81 de la Ley de Pesca, en lo pertinente, señala: *“Las obligaciones e infracciones de que trata esta ley y sus reglamentos serán de cargo del titular o de quien tenga un derecho sobre la concesión que habilite el ejercicio de la actividad de acuicultura en ella. En ambos casos se estará a la inscripción en el Registro de Concesiones vigente a la fecha de hacerse exigible la obligación o de la comisión de la infracción, según corresponda.”*

Asimismo, el artículo 86 del citado cuerpo legal, señala que: *“El Ministerio, mediante decreto supremo previo informe técnico fundado de la Subsecretaría, y previa consulta a la Comisión Nacional de Acuicultura, dictará un reglamento que establecerá las medidas de protección y control para evitar la introducción de enfermedades de alto riesgo y especies que constituyan plagas, aislar su presencia en caso de que éstas ocurran, evitar su propagación y propender a su erradicación. El mismo reglamento determinará las patologías que se clasifican como de alto riesgo y las especies hidrobiológicas que constituyan plagas.”*

Dichas medidas podrán incluir la eliminación de las especies hidrobiológicas en cultivo, el establecimiento de condiciones sanitarias para las actividades de acuicultura, así como para el transporte, lavado, procesamiento, desinfección y demás actividades relacionadas con el cultivo de especies hidrobiológicas y la sujeción a la vigilancia y control de la autoridad de la aplicación de antimicrobianos y otros productos destinados al



control de patologías y plagas. El reglamento establecerá las condiciones y el procedimiento para el establecimiento de las agrupaciones de concesiones, las condiciones que deberán cumplir las pisciculturas y los centros de cultivo en agua dulce, los informes que deberán ser entregados periódicamente por los titulares de los centros de cultivo cuyo contenido deberá referirse como mínimo al uso de antimicrobianos, vacunas, químicos y tratamiento de desechos. Prohíbese la aplicación de antimicrobianos en forma preventiva la acuicultura y todo uso perjudicial para la salud humana.

Los procedimientos específicos y las metodologías de aplicación de las medidas antes señaladas serán establecidos mediante programas generales y específicos dictados por resolución del Servicio.

El incumplimiento de cualquiera de las medidas establecidas en el reglamento, será sancionado conforme a las normas del título IX.”

Que con motivo de la disposición antes transcrita es que surge el Decreto Supremo N°319 del año 2001, el cual aprueba el Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para especies Hidrobiológicas, conocido como "RESA", el cual, en su artículo 22 A, dispone: “Deberá realizarse el retiro diario de las mortalidades de peces de cada unidad de cultivo, salvo en el caso de los centros de incubación de ovas en que el retiro de mortalidades se realizará conforme a la estrategia productiva.

El manejo de la mortalidad deberá siempre impedir el vertimiento de la misma al medio ambiente o sobre las estructuras de los centros que no estén destinadas a esta función.

Todo centro deberá contar con sistemas de extracción, clasificación, manejo y desnaturalización de, mortalidades.

El sistema de extracción de mortalidad debe ser eficaz y seguro, procurando no alterar las especies en cultivo.

Si la extracción de mortalidad se realiza mediante buceo, los implementos deberán ser de uso exclusivo de cada centro.

La mortalidad diaria de los centros de cultivo de peces ubicados en tierra, en mar y en agua dulce será sometida a ensilaje o incineración. En el caso del ensilaje deberá realizarse dentro de las 24 horas. En el caso de la incineración deberá realizarse en un plazo máximo de 3 días desde su extracción desde la jaula de cultivo, o cuando la cantidad de mortalidad extraída alcance como máximo el 75% de la capacidad del incinerador. El acopio de tránsito deberá hacerse en compartimentos estancos, y se deberán aplicar productos que desnaturalicen el material biológico...”

Asimismo, la Resolución Exenta N° 1468/2012, que “Aprueba Programa Sanitario General de manejo de Mortalidades y su Sistema de Clasificación Estandarizado, conforme a categorías preestablecidas (PSGM)”, señala, en cuanto a las definiciones:

III. DEFINICIONES

8. Mortalidad: Muertes producidas en una población de especies hidrobiológicas de cultivo durante un tiempo determinado.”



En tanto, la Resolución Exenta N°731, que modifica Resolución Exenta N°1.468, de 2012, establece en el *Artículo primero: Modifícase la resolución exenta número 1.468, citada en vistos, sólo en relación al artículo primero, numeral V: Medidas Específicas, acápite vi, Etapa 6: Entrega de Información al Servicio Nacional de Pesca, numeral 2 en el sentido siguiente: Sustitúyase, donde dice "(...) como máximo el tercer día hábil de la semana siguiente (...), por "(...) como máximo el primer día hábil de la semana siguiente (...)".*

Artículo cuarto: *La infracción a lo dispuesto en el presente programa será sancionada conforme a las disposiciones del Título IX de la Ley General de Pesca y Acuicultura."*

Por último, el artículo 118 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, prescribe: *"El que ejerciere actividades de acuicultura a cualquier título u otra de las actividades sometidas a los reglamentos establecidos de conformidad con los artículos 86 y 87 y no adoptare las medidas de protección dispuestas en ellos o en los programas sanitarios dictados por resolución del Servicio, de conformidad con dichos reglamentos será sancionado con una multa de 50 a 3.000 unidades tributarias mensuales. Si la infracción se refiere al incumplimiento de las medidas de protección dispuestas en los artículos 88 ó 90, la sanción será una multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales."*

QUINTO: Que la denunciada en sus descargos declara haber efectuado la entrega oportuna del informe semanal de las mortalidades acumuladas, en la mayoría de los casos, salvo en dos oportunidades (semanas 19 y 30), lo que, sin embargo, atribuye a "causa fortuita o fuerza mayor", producto que el Internet del Centro estaba "caído", por lo que la información no pudo ser despachada desde el centro en su oportunidad.

Que el artículo 45 del Código Civil define la "fuerza mayor o caso fortuito" como "el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc." De esta manera, la fuerza mayor o caso fortuito debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a quien lo esgrime a su favor; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

SEXTO: Que, en este orden de ideas, se hace necesario analizar si en la especie concurren los requisitos de la fuerza mayor o caso fortuito, planteados en el motivo anterior, y dado que ha sido la denunciada quien ha esgrimido la existencia de un acontecimiento imprevisible e irresistible como justificativo del incumplimiento que se le imputa, de acuerdo a las normas del "Onus probandi", la carga de la prueba recae en la denunciada.

Que como se dijo, la denunciada ha sustentado la configuración del caso fortuito o fuerza mayor en una falla del servicio de internet que imposibilitó entregar en forma oportuna la declaración de mortalidad para las semanas 19 y 30 de 2018.



Que, primeramente, corresponde dilucidar la efectividad de haber fallado el servicio de internet en la época señalada por la denunciada, para luego determinar si aquel acontecimiento reúne los requisitos necesarios para configurar una situación de “fuerza mayor o caso fortuito”.

SÉPTIMO: Que el testigo de la denunciada, ALEX JAVIER MORENO MENDOZA, legalmente examinado y sin tacha, en consonancia con lo expresado por la denunciada en sus descargos, manifestó que la entrega tardía de la declaración de mortalidad de las semanas 19 y 30 de 2018, se debió a que en dicha época la denunciada estaba cambiando de proveedor de internet, específicamente de Movistar a Satelnet, sin embargo aquello no resultó acreditado en autos desde que no pudo ser corroborado a través de la información que se solicitó mediante oficio remitido a empresas Blumar S.A., puesto que de la respuesta dada por la empresa, a través de presentación efectuada por su abogado, con fecha 23 de diciembre de 2019, rolante en el folio 22 de la carpeta digital respectiva, se concluye que el cambio de proveedor de internet no ocurrió en la época señalada por el testigo y más aún, que dicho cambio no se ha concretado al día de hoy, lo que se desprende claramente del contenido de la presentación antes referida, en cuanto en ésta se señala textual: *“Que, por este acto, y en virtud de la representación que invisto vengo en contestar oficio de fecha 13 de septiembre del año en curso, señalando a US., que aún no se ha celebrado contrato con la empresa prestadora Satelnet, por lo que esta parte no puede dar cumplimiento a lo solicitado en el oficio remitiendo dicho contrato.”*

OCTAVO: Que no habiéndose acreditado si quiera, por parte de la denunciada, el hecho al cual aquella le atribuye el carácter de fuerza mayor o caso fortuito, resulta inconducente e innecesario entrar a determinar si éste reúne los requisitos para ser catalogado como tal, por lo que la alegación de la fuerza mayor o caso fortuito esgrimida por la denunciada para justificar el incumplimiento de la obligación de declarar semanalmente las mortalidades, en forma oportuna, habrá de ser desestimada.

NOVENO: Que conforme al tenor de lo dispuesto en la Resolución Exenta 1468/2012, modificada por la Resolución Exenta N°731/2018, con fecha 14 de marzo de 2018, en cuanto esta norma señala que *“Dicha información deberá remitirse al Servicio como máximo el primer día hábil de la semana siguiente, en el formato disponible en el Sistema de Información y Fiscalización de Acuicultura, SIFA, o el que el Servicio determine”*, se concluye que la denunciada incurrió en innumerables ocasiones en el incumplimiento que la denunciante le imputa, y no sólo en las dos oportunidades que la primera ha reconocido como efectivas, ocasiones que, al tenor de lo razonado y concluido en los considerandos precedentes, constituyen incumplimientos que tampoco encuentran justificación en las hipótesis de la fuerza mayor o caso fortuito.

DÉCIMO: Que así entonces, valorada la prueba rendida, conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, sin contravenir los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, y teniendo de igual modo en consideración la presunción de veracidad contemplada en el inciso final del artículo 125, N° 1, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se dan por establecidos los siguientes hechos y circunstancias:



a) Que el centro de cultivo objeto de la denuncia de autos se denomina “Punta Cola”, su titular es Salmones Blumar S.A., está inscrito en el Registro Nacional de Acuicultura bajo el código RNA 110771, realiza el cultivo de la especie Salmón del Atlántico, y se encuentra ubicado al Norte de Punta Cola, Seno Aysén, correspondiente a la Agrupación de Concesiones 28 B, e inició su ciclo productivo el día 24 de febrero de 2018 (semana 9-2018).

b) Que el día 12 de diciembre del 2018, el fiscalizador denunciante, Christofer Erick Heyer Ramírez, inició las labores de fiscalización respecto a la entrega de información al Servicio de las mortalidades generadas en los centros de cultivo de la Región de Aysén, para lo cual verificó tanto la plataforma dispuesta para este fin, denominada Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA), como también el correo electrónico destinado como opcional para este fin, mortalidades@sernapesca.cl., percatándose que no se encontraba nuevamente efectuada la declaración de mortalidad correspondiente a la semana 49-2018 (03-12-2018 al 09-12-2018) del centro “Punta Cola”, la cual debía ser informada a más tardar el día 10 de diciembre de 2018.

c) Que el centro de cultivo denunciado, declaró sus mortalidades vía correo electrónico el día 12 de diciembre del 2018.

d) Que la entrega de información fuera de plazo, es reiterada durante gran parte del ciclo productivo del centro “Punta Cola”, no cumpliendo con los plazos en 17 de las 46 declaraciones de mortalidad donde existieron operaciones.

UNDÉCIMO: Que del análisis de los antecedentes que obran en autos, los que han permitido tener por establecidos los hechos consignados en el anterior considerando, se concluye que el centro de cultivo “Punta Cola”, cuya titular es empresas Blumar S.A., efectúa sus declaraciones de mortalidad fuera del plazo que establece la normativa, transgrediendo lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el Decreto Supremo N°319/2001, en la Resolución Exenta N°1468/2012 y en el Decreto Supremo N° 129/2013.

DUODÉCIMO: Que en cuanto a la sanción aplicable en la especie, cabe señalar que la entrega de información fuera de plazo respecto de la mortalidad, constituye una conducta que se encuentra clara y evidentemente subsumida en la figura del artículo 86 de la LPGA, disposición que, en lo medular, alude a las medidas de protección y control que deberán dictarse por la autoridad competente para evitar la introducción de enfermedades de alto riesgo y especies que constituyan plagas, aislar su presencia en caso de que éstas ocurran, evitar su propagación y propender a su erradicación, medidas todas que, por cierto, deberán ser desarrolladas y reguladas a través de un reglamento.

Que el Reglamento a que se alude en el párrafo anterior no es otro que el Decreto Supremo N°319 del año 2001, “Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para Especies Hidrobiológicas”, cuerpo



normativo, este último, que en su artículo 12 dispone la elaboración de programas sanitarios generales que comprendan, entre otras actividades, “el manejo de mortalidades y su sistema de clasificación estandarizado conforme a categorías preestablecidas”.

Que, por su parte, y en virtud de lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura y en los artículos 10 y siguientes del ya referido Decreto Supremo N° 319/2001, se dictó el “Programa Sanitario de Manejo de Mortalidades y su Sistema de clasificación estandarizado conforme a categorías preestablecidas, Resolución Exenta N° 1468/2012, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura”, el cual, en su artículo primero, capítulo II, referente a su “Ámbito de aplicación”, señala que *“El presente programa se aplicará a las etapas de extracción, manejo, clasificación, desnaturalización, retiro desde el centro y entrega de información al Servicio, en relación a las **mortalidades** generadas en los centros de cultivo de peces”*.

Que, asimismo, la Resolución Exenta N° 1468/2012, en su artículo cuarto, establece que *“La infracción a lo dispuesto en el presente programa será sancionada conforme a las disposiciones del Título IX de la Ley General de Pesca y Acuicultura”, lo que necesariamente nos remite al artículo 118 de la citada ley, disposición conforme a la cual “El que ejerciere actividades de acuicultura a cualquier título u otra de las actividades sometidas a los reglamentos establecidos de conformidad con los artículos 86 y 87 y no adoptare las medidas de protección dispuestas en ellos o en los programas sanitarios dictados por resolución del Servicio, de conformidad con dichos reglamentos será sancionado con una multa de 50 a 3.000 unidades tributarias mensuales. Si la infracción se refiere al incumplimiento de las medidas de protección dispuestas en los artículos 88 ó 90, la sanción será una multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales.”*

DÉCIMO TERCERO: Considerando los antecedentes de hecho y de derecho invocados, se dará aplicación a la petición subsidiaria formulada por el denunciante, en cuanto a la infracción cometida y la sanción que a aquella corresponde.

Que no obstante lo señalado en el párrafo anterior, y en relación a lo manifestado por la denunciada en su escrito de descargos, cabe hacer presente que el artículo 63 de la Ley General de Pesca y Acuicultura señala en su inciso quinto que *“Los que realicen cualquier tipo de actividad de acuicultura y a cualquier título, deberán informar conforme al reglamento, sobre las estructuras utilizadas en el cultivo, el abastecimiento, existencia, cosecha, situación sanitaria, origen y destino de los ejemplares.”* Así entonces, y si bien el texto transcrito impone el deber de informar la situación sanitaria de la especie en cultivo, aquello resulta manifiestamente genérico e inespecífico respecto del deber de entregar información en relación a las mortalidades generadas en los centros de cultivo de peces, obligación que, al tenor de lo latamente expuesto en el motivo duodécimo de la presente sentencia, se encuentra clara y evidentemente subsumida en la figura del artículo 86 de la LPGA, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°319 del año 2001, y en el “Programa Sanitario de Manejo de Mortalidades y su Sistema de clasificación estandarizado conforme a categorías preestablecidas, Resolución Exenta N° 1468/2012, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura”.



DÉCIMO CUARTO: Que en virtud de todo lo antes expuesto y dado que la prueba rendida por la denunciada, no tiene, a juicio de este sentenciador, la entidad ni fuerza necesaria para desvirtuar las conclusiones antes referidas, ni menos la presunción de veracidad de la denuncia de autos, al tenor de lo dispuesto en los artículos 122 y 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se tendrá por establecido el haber incurrido la demandada en la infracción consistente en haber efectuado sus declaraciones de mortalidad fuera del plazo que establece la normativa, transgrediendo lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el Decreto Supremo N°319/2001, en la Resolución Exenta N°1468/2012 y en el Decreto Supremo N° 129/2013, por lo que se le aplicará la sanción establecida en el inciso primero del artículo 118 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, según se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

DÉCIMO QUINTO: Que habiéndose acreditado en el caso de marras de un modo fehaciente, la existencia de la infracción denunciada, para la correcta determinación de la sanción que debe imponerse, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Que si bien no se requiere de un resultado dañoso para poder tener por infringidas las normas citadas en el considerando cuarto de esta sentencia, por cuanto de la sola lectura de aquellas se deduce claramente que éstas establecen medidas de prevención tendientes a proteger el patrimonio sanitario del país, y que es la inobservancia de dichas medidas lo que deviene en su infracción, sí resulta relevante el que se produzca o no daño con motivo de su transgresión, o la menor o mayor magnitud del mismo, pues ello podrá tenerse en cuenta como referencia al momento de que el sentenciador deba determinar la pena a aplicar.

Que en virtud de lo antes señalado, cabe hacer presente que no se aportó ningún tipo de antecedente probatorio que acreditara que, a propósito de los hechos denunciados, se haya producido efectivamente algún tipo de contaminación o daño ecológico, por lo que se estima condigno imponer a la denunciada una multa ascendente a la cantidad de **50 Unidades Tributarias Mensuales**, y que se estima como un monto a lo menos razonable atendida la infracción cometida, y para que en lo sucesivo la denunciada actúe con mayor diligencia y evite incurrir en acciones u omisiones que pongan en riesgos los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente.

DÉCIMO SEXTO: Que atendido que la denunciada no resultó completamente vencida, no será condenada en costas.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo prescrito en los artículos 69, 81, 86, 118, 122 y 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura; y normas pertinentes del Reglamento Sanitario para la Acuicultura (D.S. N°319 del año 2001 del Ministerio de Economía), y de la Resolución Exenta N° 1468/2012, SE DECLARA:

I.- Que **SE CONDENA, sin costas**, a la empresa **SALMONES BLUMAR S.A.**, RUT N° 76.653.690-5, representada legalmente por GERARDO ANDRÉS BALBONTIN FOX, Cédula Nacional de Identidad 7.254.586-9, a pagar una **MULTA DE CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES (50 UTM)**, vigentes a la fecha de su solución, como autora de la infracción a lo dispuesto en el artículo 86 y siguientes de la Ley General de



Pesca y Acuicultura, en relación al Reglamento Sanitario para la Acuicultura (D.S. N°319 del año 2001 del Ministerio de Economía), y a la Resolución Exenta N° 1468/2012.

II.- Que la sentenciada deberá enterar la multa impuesta en la Tesorería comunal respectiva, dentro del plazo de diez días contados desde que el fallo quede ejecutoriado.

Anótese, regístrese, dese cuenta en las estadísticas, notifíquese por cédula, y archívese en su oportunidad.

ROL N°C-345-2019

DICTADA POR JUAN PATRICIO SILVA PEDREROS, JUEZ TITULAR, AUTORIZA CATHERINE YESSANIA ULLOA VALDEBENITO, MINISTRO DE FE SUPLENTE.-

En Aisén, a doce de junio de dos mil veinte, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.

